

Facultad de Ciencias Humanas
Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Humanas
Sede Bogotá



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas

Al contestar cite este radicado No: DSC1-201609261

Fecha: 5 de julio de 2016 11:30:58 AM

Origen: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Destino: Sede Central - Dirección General



DSC1-201609261

Bogotá, 5 de Julio de 2016

Doctor
RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de Tierras Despojadas
Ciudad

Asunto: Manifestación de preocupación por el desarrollo y las garantías
para la protección y restitución de derechos territoriales de los Pueblos
Étnicos – Caso Resguardo La Fuga San José del Guaviare

Cordial Saludo.

Como acompañantes el proceso en mención deseamos a través de esta carta, hacer un recuento de nuestro acompañamiento y de elementos que creemos indispensables como antecedentes para las actuaciones que la Unidad determine frente al caso.

El caso de restitución de derechos territoriales del Resguardo y la Reserva indígenas de La Fuga ha sido acompañado por el Equipo de Acción Sin Daño de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del proyecto *Integración de los enfoques de Acción Sin Daño y Justicia Transicional en el proceso de restitución de tierras* desde noviembre de 2014. Entre este proyecto y la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras se acordó un plan de trabajo para apoyar el desarrollo de la etapa administrativa del proceso. Como consecuencia, el enfoque de Acción Sin Daño ha sido tenido en cuenta de manera consciente en la planeación metodológica, ejecución, observación y reflexión a posteriori de las diferentes actividades desarrolladas por el equipo de caracterización durante la etapa administrativa.

El análisis del contexto en el que se inscribía en su momento el proceso de restitución de La Fuga, llevado a cabo por el equipo de caracterización, alertó sobre la presencia de ocupantes no étnicos en el área del Resguardo y de la Reserva Indígena de La Fuga. Como respuesta, la DAE propició un acercamiento oportuno con la Dirección Social de la URT para diseñar y llevar a cabo medidas tendientes a socializar el proceso de restitución con los campesinos de

las veredas de El Limón, La Taguara, El Recreo y Santa Lucía.¹ El objetivo de dicho acercamiento, era poder incorporar toda la información posible de estas personas dentro de la etapa administrativa, para poder brindar mayores garantías para la protección de sus derechos y que el Juez de Restitución pudiera contar con la mayor cantidad de elementos probatorios para fundamentar su decisión.

La demanda fue admitida por el Juez 1o Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio el 2 de febrero de 2016. Es clave tener en cuenta que los campesinos de estas veredas nunca han sido señalados en el marco del proceso de restitución como opositores o victimarios. Por el contrario, en un ejercicio garantista y previsorio por parte de la URT, se quiso informar a esta población dentro de la etapa administrativa de las implicaciones del proceso, aclarando que no se trataba de una instancia contenciosa y que no está entre las competencias de la URT otorgar ni quitar derechos a ninguna persona.

Las acciones de la URT se enmarcan en el Auto 173 de 2012 emitido por la Corte Constitucional, en el que se advierte de la grave situación que viven los pueblos Jiw y Nükak en los departamentos del Meta y Guaviare que, a causa del conflicto armado y sus factores vinculados y subyacentes² se encuentran en peligro de desaparecer física y culturalmente. La Corte ordenó dentro de la parte resolutive a la Unidad de Restitución de Tierras³, atender de manera prioritaria la protección del territorio Jiw. En el marco del diálogo con la Mesa Jiw, creada por el citado Auto 173, la Unidad de Restitución de Tierras inició de oficio el proceso, entendiendo que la vía idónea para proteger los derechos territoriales del Pueblo Jiw es la caracterización de afectaciones y la solicitud de restitución de que trata el Decreto-Ley 4633 de 2011.

Entre las principales afectaciones territoriales identificadas en el ejercicio de caracterización, se encuentran varios tipos de hechos victimizantes que las han provocado. Algunos se encuentran directamente asociados con hechos violentos llevados a cabo por actores del conflicto armado y otros subyacentes a las dinámicas del conflicto y asociados por ejemplo al

¹ La primera reunión de socialización del Decreto-Ley 4633 de 2011 y del proceso de restitución de derechos territoriales de La Fuga con las autoridades de las veredas se llevó a cabo el 14 de febrero de 2015. Las siguientes reuniones llevadas a cabo por la URT-DAE en las veredas mismas, con sus habitantes, para socializar la información del proceso y recoger la información acordada con las autoridades de las veredas del 28 de febrero al 3 de marzo de 2015, el 15 de abril de 2015, y el 4 de agosto de 2015. Las actividades de socialización del Decreto-Ley 4633 de 2011, de los avances del proceso reconstitutivo étnico en el Guaviare y del enfoque ASD en su implementación dirigidas a la institucionalidad regional y municipal se llevaron a cabo el 10 de junio de 2015 y 27 de mayo de 2016.

² Ver: Corte Constitucional, Auto 004 de 2009 y Decreto-Ley 4633 de 2011, Arts. 3 y 144.

³ De acuerdo con la Orden IX del Auto 172 de 2012: "La Corte Constitucional igualmente solicitará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, que presenten un informe conjunto por escrito y en medio magnético, relacionado con el trámite de las peticiones de protección a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, que se han presentado dentro de la ruta étnica. Para lo cual dispondrán de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente auto."

narcotráfico. Así, el Pueblo Jiw de la Fuga ha sufrido abandono, confinamiento y desplazamiento forzado, así como restricciones a la movilidad dentro del territorio, que limitan sus posibilidades de supervivencia y aumentan la crisis alimentaria, puesto que se han violado los derechos a la cacería, la pesca, la recolección y la relación espiritual con el territorio. Los indígenas también han sido objeto de amenazas por parte de actores armados y de algunos colonos vinculados al negocio de la cocaína; ha habido intentos de abuso sexual, reclutamiento forzado, entre otros. En el año 2013, el Consejero Mayor Jiw de La Fuga fue asesinado por oponerse a que un colono, entonces instalado en el resguardo y actualmente preso, continuara cultivando coca. El territorio ha sido además objeto de inconsultas fumigaciones aéreas con glifosato y de agresivos procesos de deforestación y potrerización, lo que ha causado contaminación en la tierra, las fuentes hídricas y los cultivos de pancoger.⁴

Inicialmente este territorio perteneció a la zona de Reserva Forestal de la Amazonía (1959) que cobijó integralmente lo que actualmente es el departamento del Guaviare. Después se produjo la sustracción de un área de dicha reserva para adjudicar a los Jiw de La Fuga el área sustraída (1971). Posteriormente se registra la creación de la Reserva Indígena de la Fuga (1979) al amparo de la Ley 135 de 1961. La Reserva se constituyó con 8.360 has en favor de los Jiw y los Tukano Oriental. Por parte del entonces INCORA⁵, se produjo un despojo administrativo (Art. 144 D-L 4633 de 2011) al dejar de titular 4680 hectáreas de la Reserva Indígena adjudicada en 1979, al momento de constituir el Resguardo indígena en el año de 1997. Lo anterior, por cuanto respalda un hecho inconstitucional e ilegal como es la renuncia a un derecho fundamental y por tanto irrenunciable, como es el territorio. Adicionalmente, este hecho se encuentra vinculado al conflicto armado, dado que la razón aducida para justificar la conversión parcial de la reserva en resguardo, fue la gran magnitud de la colonización instalada en la parte restante de la reserva. Colonización que se dedicaba en aquel entonces a cultivo, procesamiento y venta de la pasta de coca a los grupos armados que controlaban la zona. Este accionar por parte del INCORA, dejó a la población indígena todavía más

⁴ La caracterización permitió identificar un ciclo perverso de generación de afectaciones territoriales a estos indígenas, en donde la coca ha sido el motor para el arrasamiento del territorio indígena: Primero se deforesta para sembrar la coca; luego de que el cultivo es fumigado con glifosato o cuando cumple su ciclo, los colonos han sembrado pasto para imprimirle mejoras a la finca; finalmente llena esos potreros de ganado compactan el suelo. Por todos estos procesos, el suelo se vuelve totalmente infértil y por eso los indígenas, además de perder sus derechos territoriales cuyo ámbito de ejercicio es el bosque, ven afectada su seguridad alimentaria porque en esos territorios en el corto plazo no crecen con facilidad los cultivos y conucos. Se requiere de una recuperación de los suelos a través de prácticas de agricultura itinerante como la de las Jiw o Tukano, mientras el rastrojo vuelve a aparecer.

⁵ El Resguardo y Reserva indígena de La Fuga se encuentra ubicado en el municipio de San José del Guaviare. La Fuga es el nombre que se le da al territorio ancestral indígena objeto de restitución y denomina tanto la reserva indígena, constituida mediante Resolución del INCORA 0066 de 13 de junio de 1979, como el resguardo indígena constituido mediante Resolución del INCORA 0047 de 19 de diciembre de 1997, sobre apenas 3.580 hectáreas, de las 8.360 con que fue constituida la <reserva indígena en 1979.

indefensa ante el conflicto armado y contribuyó a la falta de seguridad material y jurídica del territorio.

La investigación llevada a cabo en este caso y la reacción de algunas entidades del Estado del orden regional y municipal del Guaviare ante la iniciación del proceso de restitución para los indígenas, han permitido constatar dinámicas históricas de racismo y discriminación estructural. El desconocimiento del proceso, de la especificidad del Decreto-Ley 4633 de 2011, ha llevado a tergiversar la información del proceso y a caldear los ánimos en el Guaviare, indisponiendo a la población local en contra del proceso.

Las pretensiones de la demanda se dirigieron a solicitar la restitución de derechos territoriales de la población étnica, a través del saneamiento de la totalidad de la Reserva y la inmediata conversión de esta en Resguardo Indígena. Esta pretensión, de ser acogida por el juez, implicaría la compra de mejoras y/o derechos de propiedad. Respecto de la población desplazada en Santa Lucía, su reubicación en condiciones dignas y estables.⁶ Es de resaltar que dadas las restricciones jurídicas que pesan sobre un área de Reserva Indígena⁷, las familias que allí habitan legalmente no tienen ni tendrán la posibilidad de convertirse en titulares del derecho de propiedad. Por este motivo, se han visto excluidos de programas de inversión o desarrollo por parte del Estado o de la posibilidad de acceder a créditos bancarios. Adicionalmente, bajo el amparo del Decreto-Ley 4633 de 2011 (Art. 163), sobre todos aquellos negocios jurídicos realizados sobre territorios de ancestralidad étnica a partir de 1991 pesa una presunción de derecho que conlleva a interpretarlos como inexistentes.

Desde una mirada amparada por la justicia transicional y la Acción sin daño, durante la etapa administrativa se procuró llevar a cabo el proceso de la manera más transparente posible, para lo cual se respetó en todo momento el derecho a la autonomía y la participación de las comunidades étnicas. Adicionalmente, se realizaron jornadas pedagógicas dirigidas a la población campesina de las veredas y a las instituciones de San José del Guaviare. Desafortunadamente, el compromiso de las instituciones locales de acompañar la labor informativa de la URT en las veredas durante la etapa administrativa de este caso no fue atendido.

Recientemente se ha venido produciendo una fuerte presión política por parte de diversos funcionarios y políticos del departamento del Guaviare respecto de la URT. Además, funcionarios encargados de la defensa de los derechos humanos en la región, han acudido a los medios de comunicación para transmitir información equivocada sobre el proceso y a emitir mensajes que redundan en la discriminación en contra de los indígenas y sus derechos. De manera inescrupulosa se ha querido opacar el buen trabajo realizado por la Unidad de Restitución durante la etapa administrativa, aprovechando la coyuntura política del proceso de

⁶ De acuerdo con una interpretación en términos de igualdad, sobre la base de los lineamientos establecidos por el Acuerdo 029 de 2016, el Decreto 440 de 2016 y otros instrumentos normativos y jurisprudenciales en materia de ocupación secundaria.

⁷ De acuerdo con las Leyes 135 de 1961 y 160 de 1964

paz, para afirmar que este es uno de los casos en los que la restitución pretende dejar sin tierra ni casa a los campesinos vulnerables.

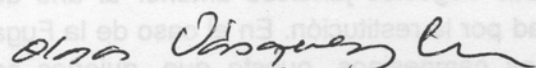
El Director de la Unidad de Restitución, alertado por estos mensajes, se vio en la necesidad de viajar personalmente al Guaviare y acudió a varias reuniones, convocadas por los políticos del departamento, entre ellas, a la Asamblea Departamental, el día viernes 24 de junio de 2016. Entre las declaraciones públicas hechas por el Director, se ha afirmado que la demanda, que ya ha sido admitida por el juez de restitución, podría ser objeto de reformas por parte de la URT, para posiblemente modificar algún aspecto de su análisis y modular algunas de las pretensiones. Con el ánimo de apaciguar ciertos temores, el Director ha señalado que quienes tengan algún documento probatorio de sus negocios jurídicos anterior al año de 1991, no serán tocados en su derecho de propiedad por la restitución. En el caso de la Fuga esto supone una expectativa equivocada para los campesinos, puesto que, quienes se encuentran ubicados en el Resguardo o la Reserva no son legalmente dueños ni podrán legalmente aspirar a la propiedad de ese territorio, por lo que el saneamiento y la respectiva compensación, serían en todo caso la vía más idónea para proteger sus intereses y derechos. Adicionalmente, es necesario recordar que los campesinos no son el objeto de la demanda, sino que lo es el Estado mismo, en cuanto es este el responsable del despojo administrativo del territorio.

Finalmente, inquieta sobremanera el futuro del proceso de restitución del Pueblo Jiw y las garantías de protección de los derechos territoriales de los Pueblos Étnicos, a partir de las recientes reacciones que ha despertado el proceso en la dirección de la URT. La Universidad Nacional, como coparte del Proyecto *Integración de los enfoques de acción sin daño y justicia transicional en el proceso de restitución de tierras* manifiesta su profunda preocupación y reitera su compromiso con el proceso de restitución de derechos étnico-territoriales, para que en el marco del Decreto-Ley 4633 de 2011 sigan siendo respetados los principios éticos de la Acción Sin Daño de la autonomía, la dignidad y libertad de los Pueblos indígenas y del Pueblo afrodescendiente.

Así mismo, el equipo de Acción Sin Daño de la Universidad Nacional confía en que el proceso de restitución constituya un aporte efectivo a la paz y la convivencia en los territorios del país en los que históricamente se ha discriminado a la población étnica, victimizándola a través del conflicto armado y sus factores vinculados y subyacentes y negándole sistemáticamente sus derechos fundamentales y en particular, su derecho al territorio.

Estamos a la espera de un espacio de encuentro con usted para hablar más largamente de este tema y de las opciones que habría que considerar en pro de lograr los objetivos de la restitución de tierras y territorios en el Departamento de Guaviare.

Cordialmente,



OLGA DEL PILAR VÁSQUEZ CRUZ

Profesora Asociada

Coordinadora Equipo Acción sin Daño - UN